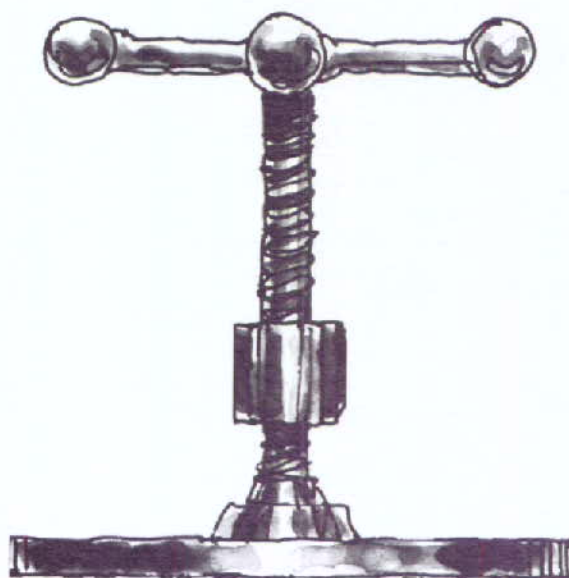


# Asedio institucional



Las instituciones venían siendo socavadas desde hace décadas. Precisamente la elección de Hugo Chávez se debió en gran medida a la esperanza que muchos concibieron de que él reformaría el Estado en el sentido preciso de acabar con la in-

gerencia en él de los partidos, del gobierno. Esta esperanza se está viendo defraudada. Para referirnos al año pasado, el país está exhausto después de una prolongada guerra de desgaste. La lucha de posiciones en el interior de las instituciones públicas y las presiones a organizaciones, que desempeñan otras funciones diversas de la política, han ido desvirtuando su dinámica a lo largo del año 2003. Ni el gobierno, más dedicado a la gestión política que administrativa, ni los asambleístas entrampados en las zancadillas reglamentarias de las comisiones, ni buena parte de la oposición, distraída en las tácticas electorales y en la promoción de candidaturas, atienden cabalmente los graves problemas del país.

Ni siquiera estamos en un juego de suma cero, sino en una confrontación destructiva, que está llevando a pique el país.

La pausa esperanzadora que supuso el mes de noviembre con la expresión democrática de las firmas para los revocatorios y el desahogo, postergado hace un año, de un diciembre festivo, se han enturbiado de nuevo con la vuelta al asedio de las instituciones.

Todos hemos celebrado la voluntad democrática, que se manifestó en la recolección de firmas de los referendos, a pesar de los amagos por descalificar el evento —sea aduciendo el sesgo del Consejo Nacional Electoral o anunciando el megafraude—, y hoy las mayorías están expectantes de los resultados con la confianza puesta en los poderes públicos, particularmente el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia.

En nada contribuyen, por tanto, a superar la crisis los intentos permanentes de bloquear los cauces constitucionales con maniobras políticas, con presiones públicas y con disturbios callejeros.

En esta fase de ampliar el modelo democrático sobre la última Constitución de 1999, reaparecen dos formas perversas de acción política de larga raigambre en nuestra historia: el intervencionismo en los poderes públicos, sin respeto a la separación de sus ámbitos de autoridad, y la competencia sectaria de grupos económico-políticos con ambiciones, que socavan la



confianza en sus proyectos y promesas alternativas.

No es de extrañar, pues, que amplios sectores de dentro y fuera del país acusen al gobierno de promover un proceso de autoritarismo excluyente y estatista con el manejo de prácticas populistas, o que, bastantes opositores al gobierno sigan desconfiando de los conciliábulos políticos, donde se negocian candidaturas a espaldas de la población.

### Juego peligroso

Oposición y oficialismo asumen la perspectiva de una victoria cantada de antemano. En todas las declaraciones y discursos públicos se proclaman vencedores con triunfos aplastantes, debido a la contundencia del reafirmazo o a la debacle del megafraude.

Los mensajes cada vez más encendidos y ansiosos de los medios de difusión, como si se tratara de un final de liga pelotera o del último round de unos pugilistas exhaustos, crean la falsa sensación de que en un breve tiempo se dirimirá la pugna con una decisión arbitral. La espectacularización del juego político por parte de los medios para enardecer a las masas opera confundiendo los ritmos deportivos con los de la lucha social, las pacientes negociaciones políticas y los cambios estructurales. Se vende la magia de que un pitido o un campanazo serán suficientes para resolver el match.

Otro tanto ocurre con las versiones militarizadas de la política, a las que nos tienen acostumbrados el Presidente y los aliados del gobierno, cuando cada avance sobre el enemigo se plantea como una declaración de guerra, un asedio institucional y, por fin, el asalto final.

Las probabilidades que arrojan los resultados de las encuestas más reconocidas del país y las conjeturas de los expertos, nos acercan, sin embargo, a escenarios más complejos, donde las fuerzas son más balanceadas y las fronteras de polarización más intrincadas, móviles y difusas. Sean cuales sean los resultados, son previsibles arduas y largas negociaciones, que requerirán raudales de paciencia

y sentido de la contención para que no naufraguemos en una operación riesgosa.

Cada facción va a tener que sopesar no solamente el programa de sus deseos, sino el posible escenario en el que sea perdedor de la contienda, siempre con el horizonte que nos une con el país para no desbarrancarnos en la política del "sálvese quien pueda" o en el desenlace fatídico de "morir matando"—así no sea más que en sentido político—.

No se trata de salvar el pellejo a toda costa, eludiendo los compromisos históricos del momento y la opción ineludible a favor de los derechos humanos, sino de privilegiar las propuestas en que quepan más ciudadanos, sin exclusiones, en aras de la convivencia social.

Diversas expresiones colectivas, "Aquí cabemos todos" de numerosas agrupaciones de la sociedad civil, "La Fundación Gumilla propone al país", entre otras, y la última exhortación colectiva del Episcopado Venezolano "Seamos auténticos servidores del pueblo", reflejan bien las expectativas de las mayorías nacionales a favor de un nuevo pacto en que, respetando las libertades políticas, se garanticen las oportunidades para los más desasistidos y se afiancen las instituciones, que faciliten la gobernabilidad del país.

### Interlocución con contenido

Lo único que puede dar objetividad a la política venezolana es la interlocución con el país. Chávez tiene el don de tocarle a cada uno su tecla. Ante el pueblo se presenta como servidor de su causa y le habla desde su imaginario y su lenguaje. A los demás les pincha o les aplaca, y en ambos casos los lleva a jugar su juego. Pero es un juego alicorto. Es verdad que crea problemas ineludibles. Pero sólo propone soluciones puntuales, no entiende que sólo instituciones solventes pueden encarar de modo permanente y superador los problemas. Por su parte la mayoría de la oposición sigue tan autista como en la última década antes de Chávez. No tiene capacidad para hablarle a la

gente. No pone en el tapete los problemas que la gente sufre. Menos aún se ofrece a resolverlos superando la actual política de operativos.

Si queremos enrumbar al país tenemos que acometer el problema del desmantelamiento institucional. Pero tenemos que llenarlas de contenido al ponerlas en función de los problemas reales: excelente educación pública, más que misiones puntuales; red eficiente de ambulatorios y hospitales barrio adentro, y no operativos sin control ni rumbo; sistema de justicia transparente, que nunca existió, desde los tribunales hasta las policías y centros penitenciarios modernos.

Sin una interlocución de los líderes con el país, dirigida a la salvaguarda de las instituciones, no tenemos salida como pueblo. Desgraciadamente, ni el gobierno, ni la oposición están empeñados en ello. Entre todos tenemos que presionar para que se aboquen a esta tarea.